

**Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Ecuador**

Programa de Ciencias Políticas

La Violencia Política
en la Región Andina

Un Ensayo Comparativo de dos
Casos en Perú y Colombia

Yolanda Rodríguez

28 de octubre de 1995

**Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Ecuador**

Programa de Ciencias Políticas

**La Violencia Política en la Región Andina
Un Ensayo Comparativo de dos Casos en Perú y Colombia**

Yolanda Rodríguez

Director de Tesis: Prof. Julio Carrión

Quito, 28 de octubre de 1995

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	3
Introducción	5
Capítulo I	
Las Interpretaciones sobre la Violencia Política	15
Capítulo II	
Transformaciones en la Sociedad	
Puñena y Violencia Política	26
2.1 Los cambios en la sociedad puneña	27
2.2 Tierra, región y violencia política en Puno	39
Capítulo III	
Sociedad, política y violencia en el Cauca	60
3.1 La problemática general de la región caucana	61
3.2 Territorios y violencia	73
Conclusiones	90
Bibliografía	

Capítulo III

Sociedad, política y violencia en el Cauca

Ubicado al suroccidente de Colombia, el departamento del Cauca aparece en los primeros años de la década de los 90 como uno de los espacios regionales más conflictivos del país. Una confluencia de factores -y de actores-, explicaría esta condición: guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo surgen en el marco de tradicionales movimientos sociales indígenas y campesinos. Estos movimientos reivindican la cultura y el territorio y sus intereses resultan ser por lo general contradictorios, no solamente con los de los poderes locales tradicionales, sino con los de los grupos guerrilleros y de narcotraficantes.

La particular situación de esta región colombiana es descrita de por la Comisión de Superación de la Violencia de la siguiente manera,

"...grupos armados insurgentes, que adelantan allí sus acciones y su proselitismo; cuerpos armados regulares y grupos de contrainsur-

gencia de carácter privado; grupos llamados de "limpieza" o de "saneamiento social"-de origen y con apoyo aún no esclarecidos a plenitud-dedicados a perseguir y exterminar a sectores urbanos marginados; amplios sectores indígenas pugnando por recobrar antiguos dominios de sus antepasados y por lograr, a través de las movilizaciones y los paros, servicios públicos que nunca han tenido y condiciones más decorosas de vida; y, como si algo faltara, núcleos de campesinos e indígenas, cada vez más numerosos, que se dedican, por cuenta de los carteles de la droga o de los grupos guerrilleros, al cultivo de la coca y la amapola."¹

3.1 La problemática general de la región caucana

El departamento del Cauca está poblado por cerca de un millón de habitantes; con una extensión mayor a los treinta mil kilómetros cuadrados, lo conforman treinta y ocho municipios. Más del 66% de la población se encuentra en zonas rurales y de ellas, el 12% son indígenas que ocupan un 16% de la superficie del departamento. En siete municipios, más del 50% de la población es indígena; así, el Cauca es el departamento que concentra la mayor cantidad de población indígena en Colombia².

Las condiciones de vida de un alto porcentaje de caucanos son deficientes; el promedio de analfabetismo en zona urbana es 8% y alcanza el 24% en zona rural; hay menos de una enfermera, una cama y un médico por cada mil habitantes; la mortalidad infantil es de 57.5 por mil niños nacidos vivos. Estos indicadores muestran niveles dramáticos en el caso de la población indígena: el índice de mortalidad infantil es de 233 por mil; la esperanza de vida es de 34 años mientras que para el promedio de los caucanos es de 54 años; el índice de escolaridad a nivel primario es de 3% y es secundario de 0.1%; la mitad de los indígenas no tiene ningún nivel de escolaridad.

Más de la mitad de las viviendas carece por completo de los servicios básicos. El déficit de electrificación es muy elevado

en el área rural (72%); lo mismo que el servicio de agua potable siendo que el 83% de las viviendas en el area rural y el 5% en el area urbana carecen de este servicio; y el déficit de servicio de alcantarillado es aún mayor. Los municipios más pobres son Jambaló, Timbiquí, Páez, Almaguer, Argelia, Inzá y Cajibío³.

El departamento del Cauca presenta sin embargo una heterogeneidad económica y social. Una parte importante de la población caucana está excluida de los procesos políticos y económicos, y los recursos estatales y locales se concentran en sectores privilegiados de la meseta de Popayán, la ciudad capital, y del norte del departamento. Esta mayor riqueza relativa contrasta fuertemente con la pobreza de las comunidades indígenas y campesinas del sur, nororiente y centro del departamento, así como con la de los colonos del litoral pacífico caucano. Así,

"el Cauca se caracteriza por un extremado fraccionamiento que ahonda las dificultades de integración, cohesión e identidad regional...La mayoría de las zonas se encuentran más integradas a territorios vecinos que a Popayán..."⁴.

Una visión de la realidad socioeconómica del departamento por subregiones permite apreciar estos desequilibrios internos que presenta el Cauca.

La subregión central, comprende los municipios de Popayán, Piendamó, Sotará, Rosas, El Tambo, Timbio, Cajibío, La Sierra, Morales, La Vega, Totoró, Silvia, Jambaló y Puracé. Una amplia extensión de la región se encuentra dentro del cinturón cafetero, siendo este producto la principal fuente de ingresos para la población. Es la región de mayor densidad poblacional (44.5 hab.por km²), con poco más del 40% de la población ubicada en las cabeceras municipales, especialmente en Popayán que concentra la prestación de servicios y actividades comerciales. Es también la región que presenta la mayor concentración indígena (47% de la población indígena departamental), y los resguardos ocupan el 15% de la superficie.

La región presenta una alta concentración de la tierra en grandes propiedades lo que, unido a la baja calidad de los suelos empuja a la migración de campesinos hacia las zonas de ladera.

La subregión norte, comprende los municipios de Buenos Aires, Calono, Caloto, Corinto, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Toribío. Constituye la parte más modernizada del Cauca por su grado de integración productiva al mercado nacional. La calidad de los suelos permite producir una variedad de cultivos de alta productividad; y su economía se encuentra fuertemente articulada a la agroindustria principalmente cañera del vecino departamento del Valle. Predomina la población rural (64.6%), y la población indígena ocupa el 24% del territorio subregional.

La subregión sur, comprende los municipios de Patía, Bolívar, Argelia, Almaguer, Mercaderes, Balboa y San Sebastián. Es una región netamente rural, pero con una reducida población indígena de economías campesinas de subsistencia de muy baja productividad, centrada en el café y otros granos. La desintegración vial y aislamiento de las poblaciones favorecen la producción de coca y la amapola. En esta región se producen agudos procesos de concentración de la propiedad de la tierra, particularmente en Patía y región del Macizo, vinculados a inversiones en tierras de parte de narcotraficantes.

La subregión de oriente, comprende los municipios de Páez e Inzá en donde la actividad económica principal es el cultivo tradicional del café y de productos de panllevar. La mayoría de la población está constituida por indígenas paeces (70% del total) y más de la mitad del territorio corresponde a resguardos, que coexisten con extensas propiedades terratenientes dedicadas a la explotación ganadera, cultivos y reforestación comercial.

La subregión occidental, comprende los municipios de Guapí, Timbiquí y López de Micay. Es la región más extensa, eminentemen-

te rural y poco poblada, débilmente integrada a la economía del departamento.

La subregión Bota Caucana está compuesta por el municipio de Santa Rosa que alberga a menos del 1% de la población departamental, dedicada fundamentalmente a la actividad agrícola.

No obstante ser un departamento mayoritariamente rural y la agricultura una de sus principales actividades económicas, éste acusa muy bajos niveles de crecimiento y productividad; ello incide en los marcados niveles de desempleo y subempleo y por tanto de pobreza de la población indígena, campesina y colona. Repercute también en la fácil captación de la mano de obra en actividades relacionadas con cultivos ilícitos. Desde inicios de la presente década, comunidades indígenas, colonos y campesinos se van dedicando al cultivo de la amapola en diversos territorios del departamento. De otro lado, la cercanía de los territorios indígenas a los centros de procesamiento y tráfico de droga lleva al asedio de los capitales del narcotráfico sobre estos territorios.

Para algunos investigadores, las características anotadas, a las que se añaden su ubicación geográfica y las condiciones topográficas y climáticas de las subregiones, así como su aislamiento de los centros poblados, hace de la región caucana,

"un espacio estratégico frente a puntos claves de comunicación con la región amazónica, con el océano Pacífico, con el Ecuador y el Valle del Cauca, lo convierten en un lugar que ofrece condiciones geopolíticas que favorecen las actividades de núcleos que se mueven al margen de la institucionalidad existente: contrabando, guerrillas y de modo destacado, la inserción de una economía ilegal dentro de la cual los cultivos ilícitos envuelven al elemento poblacional asentado en los lugares más inexpugnables del territorio."³

No obstante la presencia de elites regionales, la debilidad y en algunos casos la inexistencia de sectores dirigentes con visión

estratégica para el desarrollo económico del departamento, llevó al estancamiento de buena parte de las actividades productivas, especialmente de la agricultura que se caracteriza por la presencia del latifundio improductivo. Estos vacíos de una clase dirigente local y regional, favorecen también el desplazamiento y la instalación de nuevos poderes vinculados al narcotráfico.

La problemática básica del Cauca gira entonces en torno a la tenencia y a la productividad de la tierra. Alrededor de estos problemas se articulan conflictos que oponen a terratenientes, particularmente narcotraficantes, e indígenas de un lado; a indígenas y campesinos colonos de otro; como también a indígenas de diferentes grupos étnicos.

Tabla 4 Indicadores de Cauca

Indicadores	Po. Indígena Cauca 1972		Promedio nac. 64-74	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Tasa bruta natalidad	47,8 por mil		33,8 por mil	
Tasa bruta mortalidad	27,1 por mil		9,7 por mil	
Tasa mortalidad infantil	233,2 por mil		87,0 por mil	
Tasa bruta crecimiento	20,7 por mil		24,1 por mil	
Esperanza de vida al nacer	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
	36,1	38,7	56,5	61,3

Elaborado de Roque Roldán Ortega, Comisión de Superación de la Violencia.
Informe al Gobierno Nacional, capítulo Los Indígenas, p.5.

De un lado está el problema de la tenencia de la tierra derivado de la falta de saneamiento, titulación y adjudicación de resguardos a las comunidades indígenas. Esto genera una serie de conflictos; al interior de una misma comunidad étnica por la delimitación de linderos entre resguardos indígenas⁶; entre distintas étnias tradicionalmente en disputa⁷; entre indígenas y

campesinos derivados de las tomas de tierra realizadas por los primeros; finalmente, conflictos entre comunidades indígenas y narcotraficantes que compran haciendas cuya propiedad estaba en litigio entre los antiguos ocupantes y los indígenas⁸.

De otro lado, está el problema de la productividad. La pobreza de los suelos, los limitados recursos de producción de la economía campesina, y la ineficiencia de las grandes haciendas para impulsar el desarrollo productivo del departamento, caracterizan el desarrollo de la actividad agrícola en el Cauca. Siendo su población eminentemente agrícola rural, esta actividad se desarrolla mayormente en condiciones artesanales, con muy poca tecnología incorporada y en medio de una pobreza general de recursos.

Un indicador de este retraso económico del Cauca en relación a otras regiones del país, es la participación decreciente del departamento en la formación del PBI nacional: de 5.6% en los años 50, al 1.6% en 1975 y al 1.3% en 1988⁹.

Durante la primera mitad de la década de los 70 se realizaron exitosas movilizaciones de recuperación de tierras por parte del movimiento indígena en todo el país. En el Cauca éstas tuvieron lugar particularmente en el oriente y norte del departamento¹⁰. Sin embargo, a pesar de estos procesos de recuperación, el Cauca presenta aún una alta concentración de la tierra pero de baja productividad.

En el agro coexisten así una agricultura capitalista de alta productividad en el norte, con una agricultura minifundista de subsistencia en el oriente, centro y sur del departamento, y la gran propiedad tradicional. El siguiente cuadro sobre la distribución de la tierra en 1993, ilustra lo que venimos afirmando¹¹;

Tamaño (has.)	Predios (%)	Propietarios (%)	Superficie (%)
0 - 5	75.4	72.7	8.8
5 - 20	17.2	18.9	15.4
20 - 100	6.2	7.1	23
100 - 500	1.1	1.2	16.5
500 y más	0.1	0.1	36.3

Elaboración propia apartir de Vargas y Barraquán, op. cit.

La dinámica social y política del Cauca

Las luchas de las comunidades indígenas, de recuperación sus territorios ancestrales y por el reconocimiento y respeto de sus formas tradicionales de gobierno, marcaron la dinámica social y política del Cauca desde los inicios de la república. Estas cobraron mayor relevancia en los años sesenta y setenta, coincidiendo con la emergencia de procesos de cambio que se operaban a nivel nacional.

El advenimiento de la república significó para los indígenas habitantes de esta región colombiana, la pérdida de ciertos derechos territoriales y cierto grado de autonomía administrativa que fueron conquistados por las comunidades originarias durante la Colonia. Los resguardos indígenas, como los pueblos de indios en otras colonias, vieron disminuir sus territorios a medida que avanzaba la economía de la hacienda, marginando a los indígenas a las áreas más agrestes. Después serían los municipios para cuyo poblamiento, considerándolos terrenos baldíos, los gobiernos nacionales legislaron a favor de la segregación de territorios de resguardos para su colonización.

Fue la consecuencia de la política de disolución de los resguardos indígenas y de liquidación de los cabildos de indios, emprendida por los gobiernos republicanos;

"...el Estado nacional legisló, a principios del siglo XX, para que a los resguardos les fueran segregadas "áreas de población" destinadas a colonos, propietarios privados, acostumbrados mentalmente a considerar "baldías" las tierras de los indios. Lo que se aceleró efectivamente fue la implantación de haciendas de terraje y la parcelación de los resguardos, cuando no su extinción por iniciativa de los políticos caucanos."¹²

Así, comerciantes y terratenientes fueron avanzando sobre los territorios indígenas a lo largo del siglo. La disolución de los resguardos formaban así parte, como también ahora, de la idea de progreso y modernización de los sectores dominantes del Cauca y de los gobernantes de Colombia.

Esta avanzada encontró resistencia entre los indígenas; uno de los levantamientos más importantes fue el del indio terrajero Quintín Lame en los años veinte¹³. El proceso de marginación de los resguardos indígenas los había reducido a pequeños espacios colindantes con las grandes propiedades terratenientes. Muchos indígenas hubieron de migrar; otros se fueron vinculando como peones en la recolección de materia prima para la exportación: fique, café, coca y ahora amapola. Muchos indios fueron integrados como servidumbre permanente en las haciendas de terraje.

Entre los años sesenta y setenta convergieron una serie de luchas en el nororiente del departamento. Acciones de recuperación y luchas por la tierra de terrajeros en Silvia y Caloto; y conflictos de asalariados agrícolas de los ingenios de Corinto. Estas se dieron en el contexto nacional de luchas campesinas por la tierra, que encontraron en el reformismo llerista un terreno favorable¹⁴, debido a las políticas destinadas a la agilización de la reforma agraria y fomento de la organización de usuarios campesinos.

En el Cauca, las luchas indígenas de recuperación de tierras se dieron vinculadas a la reconstitución de los resguardos indígenas y de la autoridad de los cabildos. Estas transcurrieron entre los años sesenta y ochenta, en el marco de la violenta reacción de

los terratenientes que encargaban a sicarios, "pájaros", la represión y el desalojo de las tierras recuperadas. Centenares de líderes indígenas fueron victimados en esos años a manos de asesinos a sueldo¹⁵. En fin de la etapa de la Violencia y la pacificación de Frente Nacional parecía no haber llegado a esta parte de Colombia.

Pocas regiones colombianas albergaban tantas contradicciones y tensiones a su interior derivados de la tenencia y uso de la tierra, como el Cauca en los años sesenta. La mayor parte de los resguardos habían sido parcelados, disueltos o habían perdido la mayor parte de sus territorios, replegándose a las zonas altas y menos productivas. La mayoría de los indígenas trabajaba como terrajeros en las tierras de las haciendas, la mayor de las veces asentadas en territorios que los indígenas reclamaban como suyos.

La ampliación del terraje a mediados del siglo había significado el reforzamiento del sistema de dominación de la hacienda, y con ella, de los mecanismos de sujeción partidista¹⁶. Los indígenas eran sujeto de movilización electoral, disputado entre liberales y conservadores; aunque algunos autores señalan la inclinación liberal mayoritaria de los indígenas, algunos de los cuales habrían participado de las guerrillas liberales.

En el contexto del reformismo de los sesenta, los indígenas del Cauca revitalizaron su lucha por la recuperación de los resguardos y el no pago de terraje. Paralelamente se fue dando un proceso que, no sin tensiones y contradicciones, expresaba una tendencia de afirmación de autonomía política y organizativa de parte del movimiento indígena del Cauca. La emergencia de un movimiento indígena en el Cauca cristalizó en los años setenta en la constitución del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-; y en los ochenta se formará una segunda agrupación indígena, el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente -AISO-.

Una serie de procesos gestados en las décadas del cincuenta y del sesenta, van a dar lugar a este proceso organizativo. De un lado,

la Violencia que sacudió a Colombia a mediados de siglo, provocó el desplazamiento de campesinos provenientes de otros departamentos que ingresaron a los resguardos indígenas del norte del Cauca. Parecidos movimientos migratorios hacia las zonas indígenas del Cauca se produjeron por la expansión de la gran propiedad latifundista y agroindustrial en el vecino departamento del Valle.

De otro lado, la aparición por las mismas décadas de un liderazgo indígena resultante de los movimientos de resistencia a las campañas de "conservatización" del Cauca. En tercer lugar, la creación a comienzos de los años 60, de la División de Asuntos Indígenas adscrita al Ministerio de Gobierno y del INCORA, y la realización por ellos de algunos proyectos que tuvieron un innegable impacto. En cuarto lugar, la aparición al finalizar la década de los 60, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, como movimiento integrador de los campesinos sin tierra. Finalmente, la aparición en el oriente y norte del Cauca a mediados de los 60, de movimientos campesinos locales con propósitos reivindicativos o de resistencia al ensanchamiento terrateniente.

El Partido Comunista había promovido la formación de Ligas Campesinas, numerosas en el Cauca precisamente en la zona indígena donde los militantes encontraron a los indios organizados por cabildos o comunidades¹⁷. La ilegalización del Partido Comunista y la represión conservadora posterior al 9 de abril del 48, condujo a la creación de los comités de autodefensa del PC en el campo, para la resistencia campesina contra la violencia oficial; éstos se desarrollaron de manera importante en los vecinos departamentos de Huila y sur de Tolima.

Las políticas gubernamentales agrarias habían dado lugar a la formación de cooperativas agrarias y empresas comunitarias. Así se formaron la Cooperativa Agraria de Paniquitá y la Cooperativa Indígenas de Las Delicias. Los campesinos del norte se agruparon en el Frente Social Agrario -FRESAGRO-. Sin embargo, la idea de

las cooperativas y de las empresas impulsadas por el INCORA, no tenían consenso dentro de la organización de los indígenas; representaban otra racionalidad económica y respondían a una lógica organizativa distinta de la tradición política indígena. Estas alternativas aparecían en contraposición a la búsqueda de afirmación de la autoridad de los cabildos indígenas¹⁸.

El CRIC nació en 1971 durante la Asamblea Indígena de Toribío. La plataforma de lucha de la naciente organización contemplaba siete puntos. Uno, recuperar la tierra de los resguardos; dos, ampliar los resguardos; tres, fortalecer los cabildos; cuatro, no pago del terraje; cinco, hacer conocer las leyes indígenas y exigir su justa aplicación¹⁹; seis, defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas; siete, formar profesores bilingües para educar de acuerdo con la situación de los indígenas.

El CRIC experimentó un rápido desarrollo que lo convirtió en una de las organizaciones indígenas más gravitantes de Colombia en los años ochenta. Constituyó el liderazgo gremial y político de una parte significativa del movimiento indígena del Cauca. Lideró los movimientos de recuperación de tierras en el período 1970-1974. En los años posteriores se dedicó fundamentalmente a la organización de la producción en territorios recuperados, impulsando redes de tiendas comunales y cooperativas; y simultáneamente al afianzamiento de su estructura administrativa y económica²⁰.

Esa misma fuerza colocó a sus dirigentes en el centro de la represión oficial que lo tachaba de subversivo; de los terratenientes y de la guerrilla, como veremos más adelante. El crecimiento del movimiento indígena del Cauca implicó la necesidad de confrontar a una serie de actores armados. De un lado, las ya mencionadas "bandas de pájaros" promovidas por los intereses políticos y económicos tradicionales de la región. De otro, la represión oficial durante los gobiernos de Misael Pastrana, Alfonso López y Turbay Ayala. Esta alcanzó niveles muy

altos entre 1979 y 1981 bajo el gobierno de Turbay quien promulgó el Estatuto de Seguridad que amplió el estado de sitio y declaró subversivo al CRIC.

En 1978, en la región de la guambía se empezaron a dar los primeros pasos para la constitución de la asociación de indígenas guambianos a partir del reconocimiento por ellos mismos de la defensa de sus propias autoridades. En el desarrollo de ese proceso de autoafirmación, ocurrieron acciones de recuperación de las tierras de haciendas, a partir de 1981. Es precisamente a raíz de la entrega por parte del INCORA a comunidades indígenas de tierras recuperadas por ellas, que la política oficial agraria pasó de la entrega de tierras a las cooperativas y empresas comunitarias, a la entrega directa de éstas a los cabildos y su administración. En noviembre de 1980 se realizó la Marcha de Gobernadores en "defensa de los derechos"²¹, como una manifestación de oposición al Estatuto Indígena creado por el presidente Turbay Ayala²². Esta acción dió origen a Gobernadores en Marcha que se constituyó luego como Movimiento de Autoridades del Suroccidente²³.

Las políticas de relación con los indígenas inauguradas por Belisario Betancur, de reconocer a las comunidades como interlocutoras de la autoridad nacional, no tuvieron eco a nivel regional. Los poderes locales, con el concurso de la policía y las autoridades locales, reprimían las acciones de las comunidades. El tradicional sistema clientelar partidista seguía primando como vía de acceso a recursos, desconociéndose así la autoridad del cabildo.

Al igual que el caso de las luchas de recuperación de los paeces, lideradas por el CRIC, las de los indígenas de esta parte del departamento también tuvieron que enfrentar la violencia de la reacción de los poderes locales. También la de los diferentes grupos guerrilleros que abrieron en el Cauca sus frentes de acción armada a partir de los ochenta, especialmente en las zonas indígenas del departamento.

3.2 Territorios y violencia

Es en el escenario de la organización y movilización de las comunidades indígenas del Cauca, que van a hacer su aparición las organizaciones armadas de izquierda. Es importante situar el proceso de movilización indígena al interior de otro que le da significado; la manifestación de crecientes niveles de conciencia de autonomía y de autodeterminación por parte de los indígenas. El movimiento indígena en Colombia emerge entonces en los años setenta y ochenta, como nuevo sujeto social capaz de impactar a la sociedad nacional abandonando su carácter localista.

La dinámica que se va produciendo resulta fruto del encuentro de varios actores. El movimiento indígena por la recuperación de los resguardos y la reestructuración de los cabildos; las diferentes organizaciones guerrilleras que deciden abrir en la región frentes de lucha armada; las políticas y las decisiones gubernamentales para enfrentar tanto la presencia de la guerrilla como las movilizaciones indígenas; las decisiones y las acciones de los poderes económicos y políticos locales, que persiguen diferentes objetivos. Los capitalistas del vecino Valle que desarrollan una agroindustria expansiva sobre el Cauca; los hacendados tradicionales que resisten a la demanda de las comunidades indígenas; los capitales vinculados a la expansión de los cultivos de la amapola a fines de la década de los ochenta.

La dinámica de la violencia política que se desarrolla en el Cauca a lo largo de los ochenta, particularmente en las regiones rurales de alta composición indígena, va a estar dada por la lucha cruzada entre diferentes actores, alrededor de diferentes ejes de confrontación.

De un lado, la lucha intraguerrillera por el control de territorios. Como se verá más adelante, ello obedecería ante todo

a decisiones de orden estratégico militar de las organizaciones guerrilleras. En la estrategia de control de territorios y poblaciones, inherente a la vía armada para la disputa por el poder del estado, las diferentes organizaciones guerrilleras van a desarrollar relaciones diferenciadas con los sujetos sociales y con sus intereses. En ese proceso, irán surgiendo niveles de confrontación con la opción de autonomía y autodeterminación que las comunidades indígenas venían desarrollando desde la década anterior.

La presencia de la guerrilla en territorios indígenas y la disputa intraguerrilla por el control territorial generó conflictos con la población indígena derivados de la ocupación de sus territorios y de la violación a la autonomía de sus autoridades tradicionales. Los movimientos armados empezaron a hacerse presentes en el norte y oriente del departamento del Cauca a fines de la década de los setenta.

La lucha por la recuperación de las tierras de los resguardos, oponía no solamente a indígenas y hacendados, sino a indígenas y a campesinos colonos; éstos habían comprado parcelas de tierras a los hacendados y ocupaban por tanto tierras de los resguardos demandadas por los indígenas. Los campesinos colonos por su parte, desarrollaban su propia lucha por la obtención y titulación de tierras.

En los inicios de los movimientos indígenas de recuperación de tierras de resguardo, las FARC brindaron niveles de apoyo en lo que se refiere a la autodefensa frente a la violencia de los "pájaros". Las organizaciones guerrilleras en su mayoría sin embargo, no asumieron la reivindicación de los indios. Mas bien, éstas se vincularon a las luchas campesinas por el usufructo individual de la tierra; de allí se deriva una de las razones de la confrontación violenta entre los grupos guerrilleros, particularmente las FARC, y las comunidades indígenas.

Así, las organizaciones guerrilleras fueron uno de los actores armados, además de los "pájaros", la represión estatal y los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, que intentaron destruir o captar al movimiento indígena;

"...los grupos guerrilleros que han operado en el Cauca, particularmente las FARC, que atraídos por el potencial político que representaba el movimiento indígena, intentaron infructuosamente apropiarse de él y adecuarlo a su estructura."²⁴

A la pugna intraguerrillera por el control territorial, se agrega la disputa por los beneficios económicos derivados del control del tráfico ilegal. En dicha pugna resultarán envueltos también los propios grupos guerrilleros. A mediados de la década pasada, esta era la situación en la región,

"Actualmente, el Cauca es el Único departamento del país que tiene en su territorio dos frentes de las FARC -el VI y el VIII-, la columna más importante no sólo del M-19 sino del Ricardo Franco y, como si fuera poco, los atropellos de que son víctimas los indígenas han motivado el surgimiento de un cuarto grupo armado, esta vez de autodefensa: el Quintín Lame."²⁵

Todos los frentes en el Cauca

La creciente importancia política que el movimiento y la organización indígena fue cobrando en el Cauca en este período, lo convirtió en blanco de enfrentamiento de diferentes actores. Esta fue la motivación de la formación, inicialmente espontánea de grupos de autodefensa, que posteriormente daría paso a la constitución del Movimiento Armado Quintín Lame.

El Comando Quintín Lame surgió en 1985 como un grupo de composición eminentemente indígena y con un programa de acción específico sobre la reivindicación indígena. Tuvo sus orígenes en los primeros cuadros que se vincularon al PC-ML, al EPL y al

M-19 durante la década anterior, buscando organizar la autodefensa en el clima de la violenta represión a los movimientos de recuperación y de militarización del país, durante el gobierno de Turbay Ayala.

Efectivamente, habría sido el incremento de la represión contra los líderes indígenas y los promotores de su organización con un saldo creciente de detenciones arbitrarias y asesinatos, lo que llevó a la formación de grupos de autodefensa, que sería la base del futuro MAQL. El asesinato del dirigente Gustavo Mejía en 1974 marcó el inicio de la represión abierta contra dirigentes del CRIC, y dió lugar a la formación de grupos de autodefensa. De forma parecida, uno de los hechos más violentos del período y que constituye el precedente inmediato a la constitución del CQL, fue el desalojo de ciento cincuenta familias en López Adentro que dejó quince muertos entre ellos el asesinato del sacerdote Alvaro Ulcué.

Posteriormente las comunidades indígenas tuvieron que enfrentar la violenta respuesta de las FARC a su negativa de ceder a sus demandas. En el período 82-84 las FARC lanzaron una ofensiva dirigida a consolidar su presencia en el departamento; esto ocurrió en el contexto del repliegue del M-19 y del encarcelamiento de dirigentes de organizaciones indígenas, dejando así un espacio político vacío que la FARC intentó copar.

Esa decisión implicó desconocer a las autoridades indígenas y coaccionar a las comunidades con cobros de "impuestos revolucionarios" y el control militar de sus territorios. El enfrentamiento entre las comunidades indígenas y el Sexto Frente de la FARC, se dio de manera particularmente aguda en los municipios del nororiente, Santander de Quilichao, Corinto y Toribío. Durante ese período ocurrieron decenas de asesinatos, llamados por los guerrilleros "ajusticiamientos" de indígenas y de algunos de sus líderes; masacres como la de Los Tigres en febrero de 1981 en donde perecieron más de veinte indígenas²⁶. La pugna entre la

organización guerrillera y las comunidades indígenas permanecerá durante los años siguientes;

"En ese sentido el grupo que va a dar lugar al surgimiento del Comando Quintín Lame, se presenta como un defensor de las comunidades indígenas frente a sus enemigos tradicionales: terratenientes y pájaros; pero también como una respuesta a la presencia de otros grupos guerrilleros, de los cuales reclaman respeto e independencia"²⁷

Tradicionalmente el norte del departamento había sido una zona de exclusivo dominio de las FARC. Los habitantes de estas regiones eran sometidos a diferentes sistemas de control, como el "toque de queda" y el adoctrinamiento ideológico. A partir de 1979 el M-19 hace su aparición en las zonas indígenas del Cauca, con sus columnas móviles; en contraste con la disciplina y el control militar de las FARC, el M-19 desarrolló otro tipo de relación con la población, buscando ganar un espacio;

"El M-19 también adelanta labores de adoctrinamiento entre los habitantes de la región, les hace fiestas, juegan partidos de fútbol y les compran sus productos al precio de venta en las plazas de mercado, lo que hace más fácil su aceptación, en contraste con la disciplina militar de las FARC."²⁸

Posteriormente se irán procesando las discrepancias entre los grupos guerrilleros por el control territorial. En 1979, el departamento fue militarizado y se produjeron detenciones masivas de dirigentes indígenas, acusados de colaboración con la guerrilla. En un periódico de la época se encuentra el siguiente comunicado de las FARC a propósito de un enfrentamiento con el grupo Ricardo Franco,

"En el Cauca el grupo Franco vienen amenazando de muerte, despojando de sus parcelas, quemando las viviendas de los indígenas y campesinos de las FARC, y éstas no han hecho otra cosa sino defenderse legítimamente."²⁹

En medio de la disputa se encontraban los indígenas, víctimas de los conflictos interguerrilleros y también de la acción represiva del estado. Ante el enfrentamiento entre las FARC y el grupo Franco aludido más arriba, se reunieron cuarenta y cinco cabildos indígenas del departamento con el propósito de reafirmar su autonomía;

"...la presencia militar, tanto del Ejército y Policía como los grupos armados ajenos a nuestras comunidades, no tiene que ver mucho con nuestros problemas y tiende a agudizarse en la medida en que puede desencadenar una guerra entre las partes en conflicto."³⁰

En cierta forma, el comportamiento de la guerrilla en el Cauca parece explicarse más por razones de política nacional, que por razones de la propia dinámica sociopolítica local. Dos hechos parecen sugerir tal aseveración. Primero, las FARC desarrollaban una ofensiva acentuando la intensidad de sus acciones armadas, en momentos en que las dirigencias nacionales, a mediados de los ochenta, parecían estar dispuestas a aceptar una negociación política con el gobierno y hablaban de iniciar una transición hacia convertirse en partido político. Segundo, en 1980 el M-19 se lanzó en la "guerra del Caquetá" que le llevó a abandonar prácticamente la zona del Cauca; en 1983 inició conversaciones con el gobierno y en ese contexto, planteó un nivel de oposición a cualquier acción armada por parte del movimiento indígena³¹.

Municipios y presencia guerrillera en el período.

Un análisis de los "Mapas de la violencia" sobre la presencia de la guerrilla por municipios durante el período 1985-1991, sugiere lo siguiente³².

Al principio del período se registra la presencia de tres grupos guerrilleros, las FARC, el ELN y el M-19; siendo más importantes en términos de áreas de influencia, el M-19 y las FARC³³; en el mismo período el ELN tenía presencia en el vecino departamento

de Huila; aquí la zona de presencia del ELN colinda con una zona de presencia de las FARC.

Para 1986 esta presencia se redujo a dos grupos: FARC y M-19, experimentando éste último una notable expansión desde el centro al nororiente del Cauca. El ELN "desaparece" de algunos municipios (Puracé) en donde ahora se registra la presencia del M-19, y "desaparece" de otros en los que no se registra ahora ninguna presencia guerrillera (San Sebastián). Las FARC se concentraban hacia el centro sur occidental, ampliando su presencia en nuevos municipios (Patía), antes "ocupados" por el M-19 (Bolívar). Esta lectura de los "mapas" sugiere una disputa por el control territorial, entre los diferentes grupos guerrilleros.

Posteriormente el ELN parece haber sido desplazado del Cauca y haber pasado a zonas antes controladas por las FARC en el Huila en el límite departamental.

En 1987 se registra la presencia de tres grupos nuevamente: ELN, FARC y M-19, y se puede apreciar un avance de las FARC del centro occidente hacia el centro norte desplazando al M-19 (El Tambo y municipios aledaños). El M-19 "pierde" territorios que quedan "libres", y su presencia queda focalizada en municipios del nororiente en el límite departamental. El ELN aparece el Popayán y "recupera" San Sebastián expandiéndose a Santa Rosa; al tiempo que en el Huila, las FARC han avanzado en la zona fronteriza desplazando al ELN.

En 1988 el mapa nuevamente se modifica considerablemente; siguen tres grupos presentes en el Cauca: FARC, se "re-asienta" retirándose de El Tambo y Buenos Aires que en el año anterior aparecían como territorios de presencia del M-19, y van a quedar "libres"; se desplazan hacia López y Mercaderes hasta entonces no tocados por la guerrilla y permanece en La Sierra. El ELN se retira de Santa Rosa y San Sebastián y ocupa territorios antes ocupados por FARC (Bolívar) y ocupa Almaguer

y Rosas, hasta ahora "libres"; se expande a Totoró. El M-19 mantiene presencia en el nororiente desplazándose de Páez e Inzá; se retira manteniéndose en Puracé, hacia el sur occidente de este departamento.

En 1989 hay un cambio significativo del mapa: sólo se registra la presencia de FARC y ELN. El ELN "recupera" San Sebastián que se expande hacia el centro occidente a zonas limítrofes a territorios de presencia de FARC y abre un frente en el nororiente. Las FARC aparecen replegadas; se retiran de Mercaderes, Balboa y Argelia que quedan "libres"; mantiene "islas": Rosas, Caloto y Caldonó y ocupan Santa Rosa.

En 1990 hay un avance del ELN al recuperar presencia en Santa Rosa y controlar un continuum territorial que va del sur al centro norte (El Tambo, Popayán, Puracé, Argelia). En el centro de ese continuum, las FARC mantienen presencia. Las FARC aparecen en Patía, Balboa y en el norte.

En 1991 el mapa cambia: retiro de ambas guerrillas de Santa Rosa, San Sebastián; avance de la FARC hacia territorios del ELN de donde es desplazado y ocupa nuevos territorios al noroccidente y centro. El ELN mantiene dos focos de presencia, separados por zonas controladas por FARC.

Paréciera pues que se tratara del significado estratégico de los territorios dentro de estrategia militar de las guerrillas, el factor clave para entender la dinámica de la expansión o del repliegue de los grupos guerrilleros. El segundo factor gravitante en esa dinámica sería la pugna por el control de las ganancias producidas por los cultivos ilegales.

Tengamos un acercamiento a las subzonas al interior de la región. El occidente caucano no parece ser una zona de disputa por el control territorial; solamente se registra la presencia de la FARC en el centro y norte, dentro de una tendencia a una fuerte expansión de este grupo en centro-sur colombiano. Esta zona es

de las zonas menos pobladas del departamento, de difícil acceso; y la actividad económica es extractiva, de panllevar y la presencia de compañías mineras ha desplazado a pequeños extractores artesanales. No se registran cultivos de amapola, pero sí de laboratorios para el procesamiento de látex, lo que se explica por la cercanía de Puerto Buenaventura y la conexión con mercados internacionales.

La región de la Bota caucana, situada entre la cordillera central y la región amazónica, es un territorio más bien selvático con activa colonización desde el Huila, Caquetá y Putumayo. Santa Rosa es uno de los municipios más grandes en extensión y con menor población; actividad agrícola de panllevar y cultivos de amapola en la parte alta del municipio y coca en partes media y baja. La Bota pareciera ser un territorio de repliegue de los distintos grupos desalojados de territorios aledaños por pugnas interguerrillas.

Esta región aparece en el 87 como una zona de fuerte influencia del ELN, posteriormente se configura claramente como una zona de disputa FARC-ELN, pasando por periodos "libres" de presencia guerrillera. En relación a zonas limítrofes del país y la lógica de expansión de la guerrilla: Caquetá, Putumayo y Nariño son zonas de presencia fuerte de FARC al interior de tendencia nacional a expansión de este grupo, sobre todo centro-sur del país. El EPL fue desplazado primero por el ELN y después por FARC del Putumayo y Nariño. En 1989-90 debe haber acontecido una avanzada fuerte de FARC que sacó al EPL de estas zonas, como pudo haber sido también producto de la desmovilización o de la represión.

La zona centro aparece claramente como una zona de disputa interguerrillera: M-19, FARC, ELN, FARC. Constituye la segunda región más extensa después de la occidental, en ella se desarrolla una agricultura de bajos rendimientos y una amplia extensión de la región está comprendida dentro del cinturón cafetero que dinamiza la economía regional. Es la región de mayor densidad poblacional y la de mayor porcentaje de población

ubicada en cabeceras municipales. Es también la región de más alta concentración indígena (47% de la población indígena departamental); el 15% de la superficie regional corresponde a resguardos ubicados en Popayán, El Tambo, Jambaló, Silvia, Sotaró, La Vega, Totoró y Puracé.

Aquí aparece con fuerza el problema de la alta concentración de la tierra; la presencia de la gran propiedad sumada a la baja calidad de los suelos empuja a la migración campesina hacia zonas de ladera.

La zona norte es la más modernizada del Cauca por su integración productiva al mercado nacional en base a una agricultura comercial de alta productividad ligada a la agroindustria, en la parte baja (Corinto y Santander). Es una región de cambios económicos y sociales acelerados debido a la dinámica agroindustrial y la atracción que ejerce el capital del Valle; rápidos procesos de urbanización y proletarización del campesinado. El 64.6% de población rural y 12% de población indígena ocupa el 23.6% del territorio.

En la zona se registra primero la presencia de las FARC, después hacia el 86 expansión del M-19 en esta parte del país; hacia el 88 el M-19 va perdiendo importancia en el Cauca y en esta parte del país; desde entonces las FARC van ocupando territorios del norte, al interior de rápida expansión nacional, particularmente en el centro-sur colombiano; la presencia del ELN es muy limitada en el norte. Existen cultivos de amapola en Corinto, Miranda y Toribío.

El sur es una región netamente rural con escasa población indígena básicamente asentada en Almaguer y San Sebastián. Se combinan una economía campesina de subsistencia de baja productividad, con la ganadería extensiva y los cultivos comerciales. La zona presenta una débil integración territorial con el resto del departamento, aislamiento que presenta una ventaja comparativa para la producción de coca y amapola. Hay

fuertes contrastes en el régimen de propiedad de la tierra; el proceso de coconcentración de la propiedad es un fenómeno que se acentúa en algunas partes de la zona sur, como el Patía y el Macizo, y coincide con la presencia de empresarios ilegales que han invertido en tierras parte de sus ganancias; constituye una región geopolíticamente importante para la dinamización de la economía ilegal³⁴.

La zona oriental ha sido la receptora del desplazamiento histórico de los indígenas desde las zonas altiplánicas, produciéndose procesos de colonización interna y expansión de comunidades campesinas e indígenas. La actividad económica fundamental es la agricultura de tipo tradicional de café y panllevar y en las zonas elevadas hay cultivos de amapola.

Actores armados y economía ilegal por subregiones y municipios³⁵

En 13 de 14 municipios de la subregión centro, se registra presencia de grupos guerrilleros; y en 7 de ellos hay cultivos ilegales (coca, marihuana y amapola). En 11 se registra presencia de FARC de los cuales, en siete se producen cultivos ilegales. El ELN está en dos municipios, sólo en uno hay cultivos ilegales; igual sucede con el EPL. Se registra la acción de paramilitares sólo en un municipio, en donde no hay economía ilegal.

En la subregión norte el único grupo guerrillero presente son las FARC que están en 5 de los 9 municipios, en tres hay cultivos ilegales; en 6 municipios hay presencia de paramilitares, en cuatro de los cuales hay cultivos ilegales; en total en 5 de los 9 municipios has cultivos ilegales. La violencia estaría vinculada a las inversiones del narcotráfico en tierras, utilizando para ello mecanismos de presión para lograr la compra-venta de los predios o directamente vías violentas de expropiación (mafias del Valle).

En los 7 municipios de la subregión sur hay cultivos ilegales, fundamentalmente coca y amapola; las FARC están presentes en 6 de ellos, el ELN en 3 y el EPL en 1; hay presencia de paramilitares en 2 de ellos. La violencia estaría más asociada a la acción de bandas delincuenciales.

En los dos municipios de la subregión oriente están presentes las FARC, sólo en 1 hay cultivos ilegales (Páez, amapola). En la subregión occidente no se registra presencia ni de guerrilla, ni paramilitares ni de cultivos ilegales; se tiene conocimiento de la existencia de laboratorios debido a las condiciones favorables para el tráfico de insumos con el Ecuador y el comercio de ilícitos. En el único municipio de la subregión Bota Caucaña están presentes las FARC y el ELN en el único municipio y presenta cultivos de marihuana y amapola. Aparece una reactivación de la colonización y cambios fuertes en el proceso de poblamiento a raíz de las expectativas abiertas con la explotación petrolera en la zona de la Baja Bota, lo que probablemente modificará el mapa de violencia y conflicto del departamento en el resto de la década. Así, la creación de los escenarios de violencia estaría más vinculada con los procesos de emergencia de procesos de enriquecimiento- conflicto por la apropiación de esa riqueza-, que a situaciones estructurales de pobreza.

Los años 1989-1992 corresponden al período de inicio y consolidación de los cultivos de amapola. En esos años se da un incremento de las acciones bélicas a nivel departamental sobre todo en 1989-1991. Este hecho coincidió con la dinámica de negociación del M-19, EPL, Quintín Lame y PRT, grupos que tuvieron una relativa influencia en esta región del país. Hacia 1992 se experimentó un descenso significativo del número de acciones protagonizadas por esos grupos¹⁶.

Tres subregiones concentran la actividad guerrillera en ese período: norte, centro y sur. En todas las subregiones decrece el número de acciones bélicas en el período 91-92, a diferencia

de la subregión norte en donde se mantiene e inclusive crece ligeramente en 1992 en relación a 1991". En los 7 municipios del sur hay cultivos ilegales, en 6 de los cuales están las FARC, en 3 ELN y en 1 EPL; sólo en dos hay paramilitares;

"...y por tanto el comportamiento de la guerrilla en el Sur define en últimas la situación de los municipios con narcocultivos y su relación con las acciones bélicas."⁸

El 60.5% de las acciones bélicas en el departamento se desarrollaron en municipios con producción significativa de amapola. De 27 municipios donde se contabilizaron acciones, 15 se consideran productores de ilícitos; principalmente Bolívar, Patía, Balboa y Corinto, municipios con tradición de violencia guerrillera. En los cuatro municipio se concentra la actividad guerrillera en el período 1989-1992, dado que en ellos se dio la tercera parte de las acciones guerrilleras. Parece haber así una coincidencia entre la significación que guardan tales áreas a nivel de la economía ilegal y la presencia de la guerrilla⁹.

En 1979-1986 fueron calificados como municipios extremadamente violentos Toribío y Jambaló, según tasa de homicidios. Estos índices estarían relacionados con el conflicto suscitado por la presión del VI Frente de FARC por controlar territorio y población; este hecho generaliza las contradicciones con los cabildos, y en general con las autoridades indígenas. En efecto, hacia 1979 se inicia un proceso conflictivo que tiene su primera expresión violenta en el año 1981 con la masacre de siete indígenas, incluyendo dos dirigentes, en la vereda de Los Tigres de Toribío¹⁰. El conflicto se agudiza durante los años 1984-1985 extendiéndose a Jambaló y Silvia, en la subregión central, y a Páez e Inzá en la región de Tierradentro. En el año 85 fueron asesinados dirigentes indígenas, médicos tradicionales, maestras bilingües y en general miembros de los resguardos. Esta tendencia logró neutralizarse por la demanda de las comunidades de un respeto a su territorio y a sus autoridades. Como resultado de ese proceso de negociación entre los líderes indígenas y los

grupos guerrilleros se logró una fuerte disminución de la tasa de homicidios en los años siguientes⁴¹.

En el caso de otros municipios, como Bolívar, Patía y Balboa, que mantuvieron en el período 1979-1991 niveles muy elevados de violencia, mientras mostraban una menor incidencia relativa de la acción guerrillera, surge la hipótesis de una prolongación de la violencia como derivación de los impactos de la economía ilegal en la subregión sur. El incremento a nivel departamental de los índices de homicios obedece a la agudización de la violencia en zonas productoras de ilícitos; siendo el caso de la zona sur el caso más crítico debido a que cuenta con producción de ilícitos en todos los municipios que la conforman⁴².

Las subregiones norte, centro, bota caucana y oriente experimentaron un grave incremento en tasas de homicidios en el período 1990-1991.

Tres municipios presentan desde fines de la década pasada ritmos sostenidos de violencia, según incremento de las tasas de homicidios, Corinto, Mercaderes y Almaguer. Son municipios deprimidos con producción de marihuana, amapola y coca; y no son áreas de presencia significativa de acciones bélicas. La violencia aquí obedecería entonces a causas distintas a las que motivaron el conflicto bélico⁴³.

La zona norte es la que presenta una mayor complejidad de escenarios por el entrecruzamiento de conflictos relacionados con el tráfico de ilícitos. Las mafias del Valle ejercen presión territorial sobre norte del Cauca - importancia estratégica de la zona para el comercio de cocaína, marihuana y heroína. Las FARC obligan a los campesinos a vender materia prima a bajos precios que es revendida a empresarios de la droga; las FARC promueven entre los campesinos los cultivos ilícitos, activa participación de la guerrilla en la comercialización de las mezclas. El contexto de crisis de las comunidades indígenas presionadas por los empresarios del Valle, empuja una dinámica

de lucha por la defensa de los territorios; a esto se agregan las tensiones con el campesinado.

Notas

1. Comisión de Superación de la Violencia, Pacificar la Paz -Lo que no se ha necesitado en los Acuerdos de Paz- (Bogotá, IEPRI-CINEP-CAJ-CECOIN, 1992); p.195-196.

2. Estos son los municipios de Silvia, Jambaló, Páez, Totoró, Toribio, Inzá y Sotará. En los municipios de Toribio y Páez, el 100% del área total municipal es área de resguardo; en Jambaló ésta corresponde al 88% del área municipal.

3. Los datos están tomados de Jackeline Barragán y Ricardo Vargas, Ampliación de la economía ilegal. Violencias e impacto regional. El caso del Cauca (inédito) (Bogotá: CINEP, 1994).

4. *ibid.*, p.13.

5. *ibid.*, p.2.

6. El Informe de la Comisión de Superación de la Violencia cita un caso entre resguardos paeces en el departamento de Inzá que se origina en la falta de títulos de uno y el intento de expansión del otro. Comisión de Superación de la Violencia, Pacificar la Paz -Lo que no se ha necesitado en los Acuerdos de Paz- (Bogotá, IEPRI-CINEP-CAJ-CECOIN, 1992) p. 84.

7. El citado Informe se refiere a la ancestral disputa entre paecos y guambianos.

8. El proceso de compra de tierras por parte de narcotraficantes extrarregionales, acontece fundamentalmente en el norte del departamento y es un fenómeno relativamente reciente, ya que se inicia en la presente década. Su análisis queda entonces fuera del período estudiado en el presente trabajo. No se puede sin embargo abstraer este factor en la presentación de la actual situación de violencia en el Cauca; éstos nuevos "inversores" organizan sus propios grupos armados para la expulsión de los indígenas de los territorios que reclaman

como suyos.

9. Comisión de Superación de la Violencia, op. cit. pp.85-86.

10. Christian Gros, "Una organización indígena en lucha por la tierra: el Consejo Regional Indígena del Cauca"; en Colombia Indígena. Identidad cultural y cambio social (Bogotá, CEREC, 1991).

11. El cuadro está tomado de Vargas y Barragán, op.cit. p.16.

12. Maria Teresa Findji, "Tras las huellas de los pasados"; en Francois Correa ed. Encrucijadas de Colombia Amerindia (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, COLCULTURA), 1993; p.52.

13. Sobre la quintinada puede consultarse entre otras fuentes, a Ricardo Peñaranda, "Los orígenes del movimiento armado Quintín Lame"; Octavo Congreso de Historia, Bucaramanga, Colombia, 1993.

14. Carlos Lleras Restrepo fue presidente de Colombia en el periodo 1966-1970. Desarrolló programas de reforma agraria, para cuyo apoyo creó, a través del Ministerio de Agricultura, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC-. Posteriormente la ANUC se autonomizó del gobierno y lideró los movimientos de campesinos por la tierra.

15. Se estima alrededor de 120 asesinatos de indígenas entre 1970 y 1981, la mayoría atribuidos a los "pájaros". Peñaranda, op.cit., p.412.

16. Peñaranda, op.cit., p.410.

17. Findji op.cit., p.54.

18. Al respecto puede consultarse Findji op.cit.; de la misma autora, "Movimiento social y cultura política; apuntes para la historia del movimiento de Autoridades Indígenas en Colombia"; Octavo Congreso Nacional de Historia, Bucaramanga, 1993, pp.338-340.

19. Se refiere a la Ley 89 del 1890 que declara inalienables e imprescriptible de las tierras de las comunidades. Es justamente al amparo de esta ley que se realizan las recuperaciones de tierras de los resguardos, ocupadas por las haciendas.

20. C. Gros, op.cit., p.

21. M.T.Findji señala que la "lucha por los derechos" involucra no solamente la lucha por la tierra, sino el reconocimiento de derechos territoriales y autonomía de gobierno interno; está referido a la ley 89 de 1890.

22. Posteriormente Belisario Betancur retiró el Proyecto de Estatuto Indígena en 1982.

23. M.T.Findji sugiere la naturaleza no vertical ni centralizadora de la AISO en contraposición a otras instancias organizativas que pretendían la representación total de la diversidad de pueblos indígenas del Cauca y que tendrían un principio organizativo basado en la centralización. Probablemente el CRIC representaba esta forma organizativa con la cual no acordaban los pueblos guambianos reunidos posteriormente en la AISO.

24. Peñaranda, op.cit. p.415.

25. María Jimena Duzán, "Mi hora cero. Hablan indígenas del Cauca"; El Espectador, 10 de mayo de 1985, Bogotá.

26. Un diario de la época reproduce una entrevista a un dirigente de las FARC que actuaba en el nororiente del Cauca; en ella, el entrevistado señala que "hay necesidad de purgar a los malos indígenas que causan daño en la zona...cuando descubrimos a un mal elemento lo sometemos a un proceso de educación para que cambie. Algunos cambian, otros no, y entonces es necesario purgarlos". El mismo medio informa que a la fecha el enfrentamiento entre

indígenas y guerrillas dejaba ya más de cien muertos en lugares como Tacuayó, Toribio, Corinto, Jambaló. El Tiempo, 16 de octubre de 1985, Bogotá.

27. R. Peñaranda, op. cit., p.417.

28. María Jimena Duzán y Fabio Castillo, "Indígenas, entre la espada y la pared"; El Espectador, 19 de diciembre de 1984, Bogotá.

29. Duzán 1985, op.cit.

30. Duzán (1985), op.cit.

31. Peñaranda, op.cit., p.417.

32. Este acápite está elaborado en base al análisis de los Mapas del proyecto "Geografía de la Violencia", IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1992.

33. Por municipios: FARC-Quilichao, Caldono, Jambaló, Toribio, Piendamó, Páez, Silvia, Cajibío, Balboa, La Vega. M-19- Caloto, Bolívar, Corinto, Padilla, Inzá, El Tambo, Popayán, Timbio, Totexó. ELN- Puracá y San Sebastián.

34. Vargas y Barragán op.cit. pp.9-10.

35. Este acápite sigue el argumento y los datos presentados por Vargas y Barragán op. cit.

36. Vargas y Barragán op. cit. p.23

37. Nótese que la región norte es la más conflictiva en términos del número de acciones. La subregión de mayor impacto de economía ilegal es el sur teniendo en cuenta el número de municipios que registran la presencia de cultivos ilegales (en su totalidad en este caso). En las subregiones Central y sur actúan tres grupos guerrilleros y hay poca presencia de grupos paramilitares. A diferencia, en la subregión norte sólo actúan las FARC y hay mucha mayor presencia de paramilitares en relación a las otras dos subregiones (en 6 de 9 municipios); en 5 de ellos hay presencia de cultivos ilegales.

38. Vargas y Barragán op.cit.p.24.

39. Ibid, p.25.

40. Ibid, p.26.

41. Ibid, p.26.

42. Ibid, p.27.

43. Ibid, p.28.

Bibliografía

Asociación Peruana de Estudios e Investigación para la Paz, Violencia estructural en el Perú. Marco teórico (Lima:APEP,1990).

APEP, Violencia en la región andina: Caso Perú (Lima: APEP,1993).

APEP-CINEP, Violencia en la región andina: El caso Colombia (Bogotá: CINEP, 1993).

BOOTH, John, "Socioeconomic and political roots of national revolts in Central America"; en Latin American Research Review Volume 26 Number 1 1991.

CABALLERO, Víctor, "La realidad de la reestructuración de las empresas asociativas en Puno"; en Tierra y alternativa comunal (Experiencias y propuestas de política agraria) (Lima, 1991).

Cambio #165, Lima, 9 de mayo de 1991.

CEPES, Debate Agrario #13, (Lima: CEPES, 1992).

Comisión de Superación de la Violencia, Pacificar la Paz -Lo que no se ha negociado en los Acuerdos de Paz- (Bogotá, IEPRI-CINEP-CAJ-CECOIN, 1992).

Comisión Investigadora del Senado, Informe al Congreso sobre los sucesos de los penales (Lima: 1988).

Comisión Especial del Senado sobre las Causas de la Violencia y Alternativas de Pacificación en el Perú, Violencia y Pacificación (Lima: DESCO-CAJ,1989).

Comité Central del Partido Comunista del Perú, "Elecciones, NO! Guerra popular, SI!", documento especial 1990. El Diario # 598, 8 de febrero de 1991.

COTLER, Julio, "Radicalización y violencia de la juventud popular de Lima"; en Revista de la CEPAL #29, Santiago 1986.

COTLER, Julio, "Los partidos políticos y la democracia en el Perú"; en Luis Pásara y Jorge Parodi Ed. Democracia, sociedad y gobierno en el Perú (Lima: CEDYS, 1988)

CCP-FDCP, Reestructuración democrática del agro puneño. Vía campesino comunera; (folleto) Lima, 1986.

CHIRINOS, Luis, "Gobiernos locales y ciudades intermedias en Perú: los casos de Ilo y Juliaca"; en Alfredo Rodríguez y Fabio Velásquez ed. Municipio y servicios públicos. Gobiernos locales en ciudades intermedias de América Latina (Santiago: SUR, 1994).

DEGREGORI, Carlos Iván, Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros (Lima: IEP, 1985).

DEGREGORI, Carlos Iván, ESCOBAL, Javier y MARTICORENA, Benjamín, Perú: el problema agrario en debate/SEPIAIV (Iquitos: UNAP-SEPIA, 1992).

DEGREGORI, Carlos Iván, "Sociedad rural y violencia política: los nuevos escenarios"; en Debate Agrario #13 (Lima: CEPES, 1992).

DUZAN, María Jimena, "Mi hora cero. Hablan indígenas del Cauca"; El Espectador, Bogotá, 10 de mayo de 1985.

DUZAN, María Jimena y CASTILLO, Fabio, "Indígenas, entre la espada y la pared"; El Espectador, Bogotá, 19 de diciembre de 1984.

ECKSTEIN, Susan ed., Power and Popular Protest (California: University of California Press, 1989).

EGUREN, Fernando, "Sociedad rural: el nuevo escenario"; en Debate Agrario #13 (Lima: CEPES, 1992).

FAVRE, Henri, "Sendero Luminoso, horizontes oscuros", en Quehacer #31 (Lima: DESCO, octubre 1984).

El Diario # 496, Lima 31 de julio de 1988.

El Diario # 598, Lima 8 de febrero de 1991.

El Tiempo, Bogotá, 16 de octubre de 1985.

FINDJI, María Teresa, "Movimiento social y cultura política: apuntes para la historia del movimiento de Autoridades Indígenas en Colombia"; en Octavo Congreso Nacional de Historia (Bucaramanga, 1993).

FINDJI, María Teresa, "Tras las huellas de los paeces"; en Francois Correa ed. Encrucijadas de Colombia Amerindia (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, COLCULTURA, 1993).

FLORES GALINDO, Alberto y MANRIQUE, Nelson, Violencia y campesinado (Lima: Instituto de Apoyo Agrario, 1985).

- Gobierno Regional José Carlos Mariátegui, Estrategia Integral de Pacificación para la Región José Carlos Mariátegui (inédito). Puno, agosto de 1991.
- GONZALES, Raúl, "Puno el corredor senderista", en Quehacer #39 (Lima: DESCO, 1986).
- GONZALEZ ARIAS, José Jairo, Espacios de exclusión. El estigma de las Repúblicas Independientes 1955-1965 (Bogotá: CINEP 1992).
- GONZALEZ, Fernán, "Poblamiento y conflicto social en la historia colombiana" en Rernán Silva editor Territorios, regiones, sociedades (Bogotá: CEREC-Departamento de Ciencias Sociales Universidad del Valle, 1994).
- GRAMSCI, Antonio, Antología (Madrid: Siglo XXI, 1974).
- GROS, Christian, "Una organización indígena en lucha por la tierra: el Consejo Regional Indígena del Cauca"; en Colombia Indígena. Identidad cultural y cambio social (Bogotá, CEREC, 1991).
- GUZMAN, Alvaro et al., "Violencia, conflicto y región: Perspectivas de análisis sobre el Valle del Cauca y el Cauca"; en Renán Silva editor, Territorios, regiones, sociedades (Bogotá, Departamento de Ciencias Sociales Universidad del Valle-CEREC, 1994).
- HARTLYN, Jonathan, The politics of coalition rule in Colombia (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).
- HUNTINGTON, Samuel, Political order in changing societies (New Haven: Yale University Press, 1968).
- IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, Mapas del proyecto "Geografía de la Violencia" (inédito), Bogotá, 1992.
- Instituto de Defensa Legal, Puno, tierra y violencia (Lima: IDL, 1989).
- Instituto de Defensa Legal, Perú 1989. En la espiral de violencia (Lima: IDL, 1990).
- La República, Lima, 12.07.88.
- LE GRAND, Catherine, "Perspectivas para el estudio histórico de política rural y el caso colombiano: estudio panorámico"; en Once ensayos sobre La Violencia (Bogotá: Centro Gaitán-CEREC, 1985).
- LEAL BUITRAGO Francisco y ZAMOSC León Ed., Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80 (Bogotá: Tercer Mundo Editores-Universidad Nacional de Colombia, 1991).
- LEAL BUITRAGO, Francisco, "Estructura y conyuntura de la crisis política"; en F. Leal Buitrago y León Zamosc Ed. Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80 (Bogotá: IEPRI-Tercer Mundo Editores, 1990).

LOPEZ, Sinesio, "Perú: una modernización frustrada (1930-1991)"; en Juan Abugattas, Rolando Ames y Sinesio López, Desde el límite. Perú, reflexiones en el umbral de una nueva época (Lima: IDS 1992).

MANRIQUE, Nelson, "Política y violencia en el Perú"; en Márgenes, Revista de Sur #2 Año 1, Lima 1987.

PECAUT, Daniel, Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988 (Bogotá: Siglo XXI, 1989).

PENARANDA, Ricardo, "Los orígenes del movimiento armado Quintín Lame"; en Octavo Congreso de Historia (Bucaramanga, 1993).

RAMIREZ TOBON, William, "Estado y crisis regional: el caso de Urabá"; en Análisis Político #20 (Bogotá: IEPRI, 1993).

REMY, María Isabel, "Arguedas y López Albújar: rasgos de un nuevo perfil de la sociedad serrana"; en Debate Agrario #13 (Lima: CEPES, 1992).

RENIQUE, José Luis, "Estado, partidos políticos y lucha por la tierra en Puno"; en Debate Agrario #1 (Lima: CEPES, 1987).

RENIQUE, José Luis, "La batalla por Puno: violencia y democracia en la sierra sur"; en Debate Agrario #10 (Lima: CEPES, 1991).

RENIQUE, José Luis, "Violencia y democracia en la sierra sur del Perú. Puno en la era post velasquista"; en Degregori, Escobal, Marticorena Ed., Perú: el problema agrario en debate. SEPIA IV (Iquitos: UNA-SEPIA, 1992).

REYES, Alejandro, "Territorios de la violencia en Colombia"; en Renán Silva editor Territorios, regiones, sociedades (Bogotá, Departamento de Ciencias Sociales Universidad del Valle-CEREC, 1994).

RODRIGUEZ, Yolanda, "Los actores sociales y la violencia política en Puno"; en Allpanchis #39 (Cuzco: Instituto de Pastoral Andina, 1992).

RULE, James, Theories of civil violence (California: University of California Press, 1988).

SALGADO, Henry, "Del conflicto social a la disputa territorial. El caso del Urabá antioqueño" (Tesis de licenciatura) (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1992).

SANCHEZ, Gonzalo y PENARANDA, Ricardo (Comp.), Pasado y presente de la violencia en Colombia (Bogotá: CEREC 1991).

SILVA, Renán ed., Territorios, regiones, sociedades (Bogotá: CEREC-Universidad del Valle, 1994).

SKOCPOL, Theda, Los estados y las revoluciones sociales: un análisis comparativo de Francia, Rusia y China (México: Fondo de Cultura Económica, 1984).

TIRONI, Eugenio y LAGOS, Ricardo, "Actores sociales y ajuste estructural"; en Revista de la CEPAL #44 agosto 1991.

VARGAS, Ricardo y BARRAGAN, Jackeline, Amapola: economía ilegal, violencia e impacto regional. El caso del Cauca (inédito) (Bogotá: CINEP, 1994).

VEGA, Ricardo, La reestructuración democrática del agro puneño (Puno: IER Waqrani, 1986).

VERGARA, Ricardo, "La ciudad y el campo: Una danza eterna?"; en Debate Agrario #13 (Lima: CEPES, 1992).

WEBB, Richard y FERNANDEZ BACA, Graciela, Perú en Números 1991. Anuario Estadístico (Lima: CUANTO, 1992).

WEBB, Richard y FERNANDEZ BACA, Graciela, Perú en Números 1992. Anuario Estadístico (Lima: CUANTO, 1992).

WIEVIORKA, Michel, El terrorismo. La violencia política en el mundo (Barcelona: Plaza y Janés, 1991).

WOLFE, Marshall, "Los actores sociales y las opciones de desarrollo"; en Revista de la CEPAL #35 agosto 1988.

ZAMOSC, León, "El campesinado y las perspectivas para la democracia rural"; en Francisco Leal Buitrago y Leon Zamosc editores, Al filo del caos. Crisis política en Colombia de los años 80 (Bogotá: Tercer Mundo-IEPRI, 1991).-